

**BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.I.C. c/ COMUNA DE PUEBLO ANDINO -RECURSO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO
DE INCONSTITUCIONALIDAD**

Cita: 172/26

Nº Saij: 26090067

Nº expediente:

Año de causa:

Nº de tomo: 2026

Pág. de inicio: 0

Pág. de fin: 0

Fecha del fallo: 26/03/2026

Juzgado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Santa Fe) - Santa Fe

Jueces

Daniel Aníbal ERBETTA

Rafael Francisco GUTIERREZ

Eduardo Guillermo SPULER

Rubén Luis WEDER

Margarita Elsa ZABALZA

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > QUEJA > INADMISIBILIDAD

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION NO
CONSTITUCIONAL > SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA

Tesouro > SENTENCIA > FUNDAMENTOS SUFICIENTES

Tesouro > SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > QUEJA > MERA DISCREPANCIA

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION NO
CONSTITUCIONAL > HECHO Y PRUEBA

Tesouro > DERECHO PUBLICO LOCAL

Tesouro > FACULTAD DEL JUEZ

Tesouro > JUEZ > FACULTADES

Tesouro > COMUNA > PODER DE POLICIA

Tesouro > PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Tesouro > NEUMATICOS

Tesouro > TASA COMUNAL

Tesouro > TASA COMUNAL > PRESTACION DEL SERVICIO

Tesouro > ORDENANZA COMUNAL > INCONSTITUCIONALIDAD

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEJA. INADMISIBILIDAD. CUESTION NO
CONSTITUCIONAL. SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA. MERA DISCREPANCIA. HECHO
Y PRUEBA. DERECHO PUBLICO LOCAL. FACULTAD DEL JUEZ. ORDENANZA COMUNAL.
INCONSTITUCIONALIDAD. COMUNA. PODER DE POLICIA. PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE. NEUMATICOS. TASA COMUNAL. PRESTACION DEL SERVICIO.

El presente recurso no puede prosperar pues la lectura de los argumentos traídos a consideración de este
Tribunal en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, en confrontación con la resolución atacada,

revela la mera discrepancia de la compareciente con los fundamentos expuestos por la Cámara al emitir el pronunciamiento y remiten a cuestiones fácticas, probatorias y de interpretación de normas de derecho público local, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción, toda vez que -para declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora cuestionando el cobro de la Tasa de Almacenamiento, Traslado y Reciclado de Neumáticos Fuera de Uso a su fabricante y distribuidor- los Sentenciantes entendieron que la norma local colisionaba con las disposiciones de la Constitución nacional al avanzar en la materia extendiendo la responsabilidad a la empresa recurrente productora de neumáticos, sin verificarse la prestación de un servicio, imponiéndole una tasa específica para el financiamiento de un sistema de almacenamiento y disposición final de neumáticos fuera de uso; y, si bien aludieron a la cuestión del domicilio de la actora, hicieron especial referencia a que de las constancias de la causa no se había probado que la demandada le hubiera prestado efectiva y concretamente un servicio estatal individualizado que justifique la legitimidad y validez de la tasa creada por la ordenanza impugnada en cuanto ubica a la empresa como sujeto pasivo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ordenanza 4/2021 de la Comuna de Pueblo Andino. - Jurisprudencia concordante con *Bridgestone c. Comuna de Empalme Villa Constitución*, 2024:995, sumario J0053657.

Texto del fallo

T. 2026, SENTENCIA NRO. 172.

Provincia de Santa Fe, 26 de marzo del año 2026.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad planteado por la demandada contra la resolución de fecha 11 de abril del año 2025, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 en autos "BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.I.C, contra COMUNA DE PUEBLO ANDINO -RCA- (CUIJ:21-17456332-9)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00517196-9); y,

CONSIDERANDO:

1. Mediante sentencia del 11.04.2025 (A. y S. Nro. 120, Año 2025) la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 resolvió hacer lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto. En consecuencia, declaró ilegítima la ordenanza n° 04/2021 en cuanto mediante ella se creó la Tasa de Almacenamiento, Traslado y Reciclado de Neumáticos Fuera de Uso; anuló los actos impugnados; y ordenó restituir a la actora el importe ingresado a los fines de cumplimentar con el requisito establecido en el artículo 8 de la ley 11330, con más intereses.

2. Contra ese pronunciamiento la Comuna de Pueblo Andino planteó recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario.

Después de referir a la admisibilidad de la impugnación, aseguró que en el caso "no se está aplicando una responsabilidad legal ni financiera al productor de neumáticos; sino que se utiliza el concepto para determinar quién abonará la tasa por los servicios de recolección,

almacenamiento, traslado y desnaturalización del N.F.U."

Dijo que en el fallo cuestionado se consideró que ha excedido los límites de su jurisdicción, aun cuando la tasa sólo abarca a los neumáticos fuera de uso recuperados en el ámbito de la Comuna; que así tutela el interés local a un ambiente saludable de su población, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75, inciso 30), y 123 de la Constitución nacional.

Adujo que la Cámara separa en dos partes lo que constituye una sola cuestión, por un lado la materia ambiental de la cual no duda que su protección sea potestad de la Comuna, y por el otro hace un análisis vetusto de la ley 8173 del '77, sobre tributos, limitando la capacidad de tributar sólo si se es propietario y por ello concluye rechazando la tasa comunal.

Advirtió que el ejercicio del poder de policía en materia ambiental debe ser preventivo.

Afirmó que las tareas realizadas por la Administración implican "un beneficio para el actor"; que "el bien es el neumático que se sitúa en el ejido comunal, el sujeto pasivo es quien generó el mismo, y el hecho imponible su abandono"; y que la Cámara no realiza una interpretación total de la prueba, atento a que no comprende el costo del servicio que insume la planta de desnaturalización.

Indicó que "tampoco se puede negar que no sea un servicio prestado a la empresa, ya que la misma no está impedida de recolectar sus neumáticos tirados en la vía pública, para que no se le exija el pago por hacerlo"; y que no se puede obligar a la población a convivir con los neumáticos fuera de uso, que son desechos contaminantes.

Precisó que la tasa cuestionada se dictó en concordancia con lo dispuesto en los artículos 107, inciso 3), de la Constitución provincial; 39, inciso 16), de la ley 2756; y 41 de la Constitución nacional.

Citó doctrina y la resolución n° 523/13 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Expresó que los neumáticos fuera de uso constituyen un riesgo para la salud pública en razón de que son albergue para roedores y criaderos de insectos; y que, atento a que el manejo en forma sustentable de esos neumáticos se debe abordar y regular, "la creación de una tasa para controlar y preservar el medio ambiente y la salud y seguridad pública mediante el tratamiento sustentable de los N.F.U. es, a todas luces, constitucional".

Alegó que no se ha apartado de lo establecido en la ley 8173, sin perjuicio de lo cual "se prioriza la Constitución reformada"; que "tanto la Constitución como las leyes facultan a los Municipios y Comunas a la creación de la tasa ambiental por NFU, entendiendo como R.E.P. al concepto cuya finalidad es la de establecer un enfoque sobre política ambiental, -no así sobre responsabilidad civil-, sobre bienes que se localizan en el ejido comunal y verificando el

hecho imponible mediante el abandono del N.F.U. en la Comuna".

Rechazó que surja de la ley 8173 que no pueda exigirse el pago de tasas a sujetos sin presencia física en la jurisdicción comunal.

Aseveró que no ha legislado sobre responsabilidad extendida a los productores sino que utiliza el concepto de la legislación nacional y la doctrina para determinar el sujeto pasivo de un tributo; que la tasa "no carga al Actor por todo el ciclo de vida del producto"; y que el gravamen le brinda el servicio de recolección, almacenamiento, traslado y desnaturalización de su neumático abandonado para evitar consecuencias negativas en el medio ambiente.

Expuso que "no se considera al actor generador directo de los NFU sino, en su caso, el responsable tributario de los mismos y quien aprovecha económicamente en la fabricación de los productos que, luego de su uso, se convertirán en residuos"; que "el porqué de que sea sólo el productor y/o importador el sujeto pasivo del tributo se trata sólo de una cuestión de política tributaria"; y que "hay que distinguir la responsabilidad civil con ser sujeto pasivo de una tasa ambiental, se aclara que no se hace responsable a nadie ni se pretende multar al actor, sino que se cobra una tasa por un servicio prestado", lo cual constituye "legítimo ejercicio del poder de policía de la Comuna en materia de higiene, seguridad, orden social y ambiental".

Sostuvo que la protección del medio ambiente es competencia de los tres niveles de gobierno; invocó normativa provincial; y añadió que su potestad regulatoria, mediante el dictado de restricciones administrativas, ha sido reconocida desde hace tiempo por la Corte nacional.

Arribó a la conclusión de que "hubo una decisión constitucional de política tributaria dirigida a que se destine el monto de la tasa de protección ambiental creada, para la prestación de los servicios municipales por la recolección, traslado, almacenamiento y desnaturalización de los N.F.U. generados por la Actora y abandonados en el ejido Comunal".

3. La Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2, por resolución de fecha 24.10.2025, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad por entender, en síntesis, que la impugnación -en el marco del examen que le correspondía realizar- resultaba inadmisibile. Comparece entonces la demandada de manera directa ante esta Corte.

4. Se adelanta que el presente recurso no puede prosperar pues la lectura de los argumentos traídos a consideración de este Tribunal en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, en confrontación con la resolución atacada, revela la mera discrepancia de la compareciente con los fundamentos expuestos por la Cámara al emitir el pronunciamiento y remiten a cuestiones fácticas, probatorias y de interpretación de normas de derecho público local, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción.

En efecto, recuérdese que en el caso el Tribunal declaró procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora cuestionando -en definitiva- el cobro de la Tasa de Almacenamiento, Traslado y Reciclado de Neumáticos Fuera de Uso a su fabricante y distribuidor.

Para así decidir, inicialmente si bien reconoció la validez de la protección del medio ambiente en el ámbito comunal, consideró que dicho poder de policía no puede comprender normativa sobre la responsabilidad del productor al estadio posterior al ciclo de vida del producto.

Indicaron que la potestad regulatoria de derechos que importa el ejercicio del poder de policía ambiental no puede confundirse con la potestad tributaria municipal o comunal de establecer una Tasa que, en los términos de la jurisprudencia de la CSJN, ha sido conceptualizada como "prestaciones exigidas aquellos a quienes de alguna manera afecta o beneficia la actividad estatal, por lo que su cobro corresponde a la concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente" (Fallos: 224:663; 332:1503; 236:22, entre otros).

En tal sentido, los jueces señalaron que, teniendo en cuenta que la tasa se encuentra directamente vinculada con un servicio o actividad estatal individualizada y divisible que efectivamente se presta al contribuyente y que torna exigible su pago como contraprestación, correspondía analizar la legitimidad o no de la tasa retributiva establecida por la ordenanza impugnada.

En tal cometido, los sentenciantes entendieron que la norma local colisionaba con las disposiciones de la Constitución nacional al avanzar en la materia extendiendo la responsabilidad a la empresa recurrente productora de neumáticos sin verificarse la prestación de un servicio, imponiéndose una tasa específica para el financiamiento de un sistema de almacenamiento y disposición final de neumáticos fuera de uso.

Así, si bien aludieron a la cuestión del domicilio de la actora, hicieron especial referencia a que de las constancias de la causa no se había probado que la demandada le hubiera prestado efectiva y concretamente un servicio estatal individualizado que justifique la legitimidad y validez de la tasa creada por la ordenanza impugnada en cuanto ubicaba a la empresa como sujeto pasivo.

En efecto, precisaron las pruebas que constan en el expediente: informe confeccionado por Worms Argentina S.A. relativo al sistema de reciclado de neumáticos fuera de uso implementado por el gobierno local, constatación judicial en el Centro Transitorio de Acopio donde se detalla su funcionamiento y de donde surge que "el predio en el que se hallan es de

propiedad de la Comuna, los neumáticos se encuentran a la intemperie... que los neumáticos usados son recogidos por la propia comuna o por vecinos y traídos a este predio... se recepcionan y se ordenan por tipo... se limpian y luego al empresa contratada los retira y los lleva a su planta de tratamiento".

De todo lo cual, el A quo consideró que no se había demostrado la prestación de servicios y tampoco incluso que para practicar las liquidaciones se hubiera observado el procedimiento de determinación de deuda conforme la ley 8173 (arts. 24, 25 y 26).

Frente a tales fundamentos, la demandada se limita a referir que los jueces analizaron el caso como un supuesto de responsabilidad civil (al aludir a la responsabilidad extendida del productor), siendo que correspondía su abordaje desde la óptica del derecho administrativo ambiental; y que la tasa en cuestión no colisiona con la Constitución nacional ni con la ley 8173.

Mas lo cierto es que con tales alegaciones sólo se colige la mera discrepancia de la compareciente con lo resuelto por el Tribunal al efectuar un pormenorizado análisis del caso, brindando extensas consideraciones con sustento doctrinario y jurisprudencial y concluir en definitiva y en sustancia que aunque las municipalidades y comunas tienen potestad para adoptar normas que colaboren a ampliar la protección del medio ambiente, ello no puede implicar que lo determinen al margen de las normas que condicionan un tributo. En efecto, la cuestión medioambiental podría insertarse dentro de las tasas teniendo en cuenta esta definición, es decir, sin que la introducción del elemento ambiental desnaturalice este concepto, respetando sus estructuras, fundamentalmente, la existencia de desarrollo o no de una actividad estatal que atañe al obligado.

En ese aspecto, los cuestionamientos que se formulan respecto del alcance de la aplicación al caso de la ley 8173, más allá del acierto o el error de las consideraciones esgrimidas por los jueces sobre ello, no desmerecen el argumento central en el que se basó la Cámara, esto es la inexistencia de prueba que hubiera demostrado la efectiva y concreta prestación de servicio, ello de conformidad con el reiterado criterio jurisprudencial de la Corte nacional y provincial (Fallos:236:22; 312:1575; 329:792, entre otros; A. y S. T. 278, pág. 57; T. 133, pág. 259, entre otros).

Argumentos que permanecen incólumes ante las genéricas alusiones recursivas de apartamiento de los antecedentes de la causa en orden a entender acreditado tal extremo, ya que la recurrente omite precisar las constancias que habrían sido preteridas por la Cámara y que darían fundamento a sus afirmaciones, todo lo cual evidencia tan sólo su disenso con la

valoración probatoria efectuada por el Tribunal.

Por lo demás, no puede pasar desapercibido el detallado mérito que los sentenciantes hicieron de los antecedentes del caso, puntualizando las pruebas producidas (oficios e informes que dan cuenta del funcionamiento del sistema de almacenamiento y disposición final de los neumáticos fuera de uso que ofrece la demandada) y la consideración que de las mismas no se había acreditado la exigida prestación de servicio que justifique la legitimidad de la tasa pretendida.

En suma, la impugnante no logra evidenciar que los vicios de arbitrariedad invocados se encuentren patentes en la sentencia impugnada, ya que sus argumentaciones recursivas impiden tener por configurada la necesaria conexión con los antecedentes del caso de modo tal de franquear el acceso a esta instancia extraordinaria.

De todo lo expuesto, se colige que las cuestiones juzgadas han sido resueltas con fundamentos suficientes, conformando un decisorio que no aparece a primera vista dissociado con las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida. La conclusión a la que arribó el Tribunal podrá o no ser compartida por la impugnante, pero en la medida que no se demuestre un apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO. DIGITALMENTE: GUTIÉRREZ - ERBETTA - SPULER - WEDER - ZABALZA - PORTILLA (SECRETARIA)

Tribunal de origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2.